

Hacia una democracia como identidad restringida: sociedad y política en México

SERGIO ZERMEÑO

I

El artículo que aquí presentamos es producto de una serie de investigaciones sobre diferentes movimientos, luchas sociales, rupturas del orden o simplemente situaciones en las que una parte de la sociedad se opuso a la progresión de un conjunto de decisiones que la afectaban (o que pensó que la afectaban).

Fueron luchas que se desarrollaron en los años ochenta en distintos puntos de la República mexicana como Juchitán, el Distrito Federal, Chiapas, Ocoyoacac, Chihuahua o San Luis Potosí. Su común denominador estuvo dado por el supuesto de que se estaba expresando algún tipo nuevo de democracia al que terminamos refiriéndonos como una “democracia emergente”.

La pregunta es inevitable y fue inevitable para nosotros desde el principio: ¿El término *democracia* que íbamos a utilizar para describir y analizar estos sucesos venía al caso por ser un término de moda o porque estábamos efectivamente frente al surgimiento de un nuevo tipo de manifestaciones sociales en el ámbito nacional o, digamos, latinoamericano?

¿No surgió acaso la democracia en la propuesta de los jóvenes argentinos que animaron la reforma universitaria en la ciudad de Córdoba en el año de 1917? ¿El cardenismo no fue también expresión de una emergencia popular ante un régimen posrevolucionario pronto a olvidar las demandas que habían costado un millón de muertes entre 1910 y 1920? También la Unidad Popular chilena fue una de esas grandes emergencias desde abajo, acompañada por el jolgorio de unos sectores medios que luego atestiguarían incrédulos el catastrófico desenlace. Y qué decir de Bolivia en 1954, de Cuba en 1959 y de Nicaragua en 1980. ¿No fueron acaso emergencias volcánicas desde las entrañas de lo popular y de lo nacional en contra de la explotación, de la opresión, de la antidemocracia y del imperialismo?

Esto nos condujo a justificar el título bajo el cual reunimos aquellos ensayos.

Un enfoque sobre la demarcia, emergente en colectividades restringidas (tradicionales y modernas) buscaría destacar las especificidades y las diferencias entre las luchas sociales de abierta ruptura o aquellas que tienden a desplazarse hacia el sistema político e institucional (sindicatos, partidos, parlamento...), por una parte, y por otra los movimientos sociales de base. Estas últimas constituyeron el tipo de acciones sociopolíticas que queríamos privilegiar. Diferenciamos, además, estos movimientos de base en dos tipos:

1) Los que tienden a formar frentes, uniones, coordinadoras, centrales, alianzas y partidos cuyo objetivo es unificar esos movimientos y manifestaciones (legitimados o no), con el fin de concentrar un poder que los conduzca a influir en la política nacional y eventualmente al control del Estado, y

2) los movimientos, dirigencias y corrientes que rechazan las estructuras verticales y la política y sólo eventualmente participan en centrales, alianzas, frentes o coordinadoras por considerarlos jerárquicos, corruptibles y, en el extremo, una pieza más del sistema de dominación presente (en particular a los partidos políticos).

Estos movimientos, dirigencias y corrientes se proponen trabajar en la base del pueblo, en cada manifestación social de descontento tratando de resolver, ante los aparatos gubernamentales, las necesidades básicas y demandas fundamentales de esa población movilizada, relativamente reducida y bien definida en su identidad, su adversario y sus problemas (lo mismo da si es una comunidad indígena, una alianza ejidal, un conflicto de tierras, una lucha municipal, una o varias secciones sindicales de obreros o de sectores asalariados medios, una colonia popular, etcétera).

Lo más original de este planteamiento es su afán por evitar las provocaciones y confrontaciones abiertas con el Estado (incluso al buscar solución a sus demandas ante las autoridades públicas); rechaza también cualquier forma jerárquica en el interior del movimiento que pueda conducir al autoritarismo, al "descabezamiento" o a la corrupción y cualquier tipo de publicidad o notoriedad inútil de los dirigentes o del movimiento; busca evitar igualmente una adscripción ideológica que genere suspicacias, rechazo o que pueda justificar la represión (trotsquista, maóista, comunista...). Al evitar esta adscripción ideológica se separa también de planteamientos que establecen una *ruptura* con el lenguaje de la sociedad en que nacen y con su adversario (cristianismo radical, milenarismo, anarquismo...); por el contrario, estos movimientos de base buscan mantener un lenguaje y un terreno de negociación homogéneos con su adversario.

Observan, en fin, un gran hermetismo alrededor de las contradicciones internas y una disciplina de silencio en torno a las escisiones o expulsiones. Con todo esto tratan de lograr una continuidad en las luchas sociales, ya que la experiencia ha mostrado que las otras formas de acción

sociopolítica conducen a la represión, la cooptación y la desintegración del actor movilizado debido a su deficiente y transitoria identidad. Esto último es producto de: *a)* la débil cohesión de los actores sociales así como las múltiples tendencias hacia su desarticulación en las sociedades dependientes, es decir, sociedades en cambio histórico en donde las categorías socio ocupacionales no están representadas por fuerzas políticas unitarias que se enmarquen a su vez en ideologías correspondientes —volveremos a esto—; *b)* debido también a las amplias alianzas a que tienden los movimientos ante un Estado fuerte como el mexicano y que se desintegran por sí mismas o son fácilmente desmanteladas (por represión-cooptación-solución), una vez que pasa el momento álgido de una coyuntura, y *c)* la vecindad con el imperialismo norteamericano (y su correlato, la guerra centroamericana), que busca convertir a cualquier lucha social por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en un problema de tipo internacional en donde los actores de ese movimiento y sus dirigencias son rápidamente deslegitimadas con la acusación, en la mayoría de los casos risible, de encontrarse coludidos y ser un enclave del comunismo cubano-soviético (o es utilizada toda esta argumentación por el Estado nacional-dependiente para reprimir dichos movimientos).

Tenemos así que entre los parámetros centrales de las manifestaciones más o menos recientes de esta democracia emergente y restringida habría que destacar:

a) Una posición *no confrontacionista* y en esa medida defensiva ante la represión endémica venida de la poderosa burocracia gobernante;

b) una *delicada situación internacional* que empuja a las luchas sociales a deslindarse ideológica y políticamente de las corrientes comunistas guevaristas, maoístas (¿reaganistas?) y hasta socialistas que el militarismo americano ha convertido en sinónimo de enclave “cubano-soviético” y que levantan suspicacias gratuitas entre la población movilizada;

c) casi como respuesta a lo anterior, estos movimientos tienden a balancear esa desideologización acercándose a los métodos y contenidos cristianos de base (también protestantes), para el cambio social, o al menos coexistiendo con ellos; *

d) tienden igualmente a establecer sus demandas en torno a problemas concretos (agua, abastecimiento, escuela, transporte...) y buscan soluciones para esta colectividad y en el corto plazo, y no para toda la nación dentro de veinte años. Hay también una pragmatización de sus horizontes de demandas y éstos tienden a ser medidos cuantitativamente (más tierra, más empleo, mejores salarios, mejores precios...);

* La propuesta coincide en varios puntos con la contenida en el movimiento sindical polaco de *Solidarnosc*: amenaza exterior constante, fuerte autoritarismo interior, resistencia desde unidades restringidas de base, desideologización política pero llamado a ideologías religiosas y soluciones concretas a problemas concretos. Sin embargo, a diferencia de Polonia aquí no encontramos la fuerte presencia de la clase obrera ni, en consecuencia, una lucha de clases bien definida.

e) como la experiencia ha mostrado la discontinuidad de la oposición en general de los movimientos sociales de pleno enfrentamiento y de aquellos otros que transitan rápidamente hacia el sistema político (partidos, sindicatos, parlamentos, grupos de presión o de interés, etc.) viviéndose así una destrucción constante de los canales y espacios democráticos y como todo ello ha redundado en la permanente supremacía del Estado sobre la sociedad y sobre los movimientos sociales, el planteamiento que ahora analizamos tiende a “construir” a los actores en un “nivel restringido”, “basista”, por debajo de las clases y de los grandes actores históricos (clase obrera, campesinado, masas, estudiantes, etc.), a la inversa de la tendencia general en México y en América Latina que fue el ir “hacia las alturas” (hacia el sistema político y hacia el Estado en busca de representación y de influencia).

La combinación de una postura no confrontacionista y una mayor continuidad en la acción social que de ahí deriva constituye, en fin, el mejor soporte para la consolidación de una nueva etapa, una etapa emergente y estructuralmente diferente de la democracia en América Latina.*

II

Una buena parte de lo dicho anteriormente es más o menos conocido, pero resta explicar por qué se puede hablar de una etapa estructuralmente nueva del quehacer político en América Latina y cuál es su especificidad en México.

Un planteamiento de esta naturaleza requiere, para que el deseo democrático no quede en buenas intenciones o en simpatía por los derechos de los desposeídos, de un aparato demostrativo con mayor perspectiva teórica e histórica. Sin embargo, a falta de espacio, tratemos de recrear una imagen de lo que ha sido la acción social latinoamericana en la perspectiva histórica y en el momento presente, antes de abordar nuestro país.

Lo que habría que retener, entonces, a reserva de una comprobación mejor fundamentada, es lo siguiente: en América Latina, en el Cono Sur y básicamente en Brasil se vivió desde muy temprano el fin del Estado

* Estando este trabajo en proceso de edición, tuve oportunidad de leer el artículo de Paulo J. Krischke: “Movimientos sociales y transición política: contribuciones de la democracia de base”, en Ilse Scherer-Warren y Paulo J. Krischke, *¿Una revolución en lo cotidiano?*, São Paulo, 1987, Editora Brasiliense. Ahí, el autor muestra sus coincidencias con nuestra presentación de “La democracia como identidad restringida” y desarrolla una discusión a fondo sobre los aspectos *positivos* y no meramente *defensivos* como a veces se quiere de estas manifestaciones basistas: el carácter continuo y acumulativo de las demandas frente al Estado, el principio de “negociación permanente” como estrategia a largo plazo influyen positivamente en transformaciones políticas y culturales de igualitarismo y democratización, reformando constantemente las instituciones, politizando la vida cotidiana y acercando a la sociedad y la política.

populista, esa forma del Estado y de la política que consistía en dar cabida ampliamente y al mismo tiempo a las demandas de los grupos industrializadores, de los sectores medios, de la clase trabajadora y de las masas populares.

Todos conocemos las razones que hicieron de la etapa sustitutiva un espejismo y cómo Brasil desde 1964, Argentina y Uruguay de forma drástica en los setenta y Chile en 1973 tuvieron que dar por cancelada esa etapa de participación y enfriar por los métodos más brutales a la enorme olla pluriclasista de la política que eran los partidos, el parlamento, los sindicatos, los grupos de presión y de interés, etc. En una palabra, se tuvo que congelar el espacio de la política, el de las instituciones de la participación pública e inaugurar lo que se conoció como los regímenes burocrático-autoritarios, para emplear la terminología de Guillermo O'Donnell. Esos regímenes se basaron en un rechazo profundo de todo lo que fuera participación y organización populares y construyeron una imagen según la cual el Estado debe ser un aparato más restringido, eficiente, ajeno a los gastos en beneficio social, a las instituciones elefanteásicas del período populista, a la participación en la economía, etc. Pero lo que aquí nos interesa retener de estos ejemplos es que la franca entrada en la etapa neoliberal de aquellos países no tuvo como correlato un fortalecimiento de la acción clasista por parte de los sectores asalariados o respuestas masivas desde lo propiamente popular. En lugar de las amplias identidades socio ocupacionales y las organizaciones políticas o sindicales correlativas, las formas de la participación política tendieron a buscar canales más restringidos y basistas, no lejanos a lo ya descrito.

Las preguntas entonces son las siguientes: primero, ¿por qué en México hemos vivido una etapa populista o popular nacional tan prolongada? y segundo, ¿por qué este retraso nos coloca, hoy, ante un cambio tan sorpresivo en lo referente a los espacios, las formas y los contenidos del quehacer político en nuestro país?

Con respecto a la primera pregunta se impone una diferenciación: en América Latina, la etapa popular nacional fue un momento de gran participación de la sociedad en la política, es cierto, pero a diferencia de México no fue enmarcada por una distribución que colocara al Estado como un actor hegemónico en aquel proceso. La diferencia de México con respecto al populismo latinoamericano es esta: nuestro país llegó a semejante etapa con dos situaciones a favor: a) la oligarquía primaria exportadora había sido derrotada, y b) el Estado se había convertido, a diferencia de todos los otros países latinoamericanos, en un actor hegemónico indiscutible, no sólo en el reparto del poder sino, y ahí está lo importante, cuando se reafirmó como el actor histórico dirigente por excelencia (agente del desarrollo y destructor del orden pasado).

Pero detengámonos un poco en este ejemplo raro de reparto sociopolítico entre sociedad civil y Estado de manera que luego podamos entender

con mayor precisión por qué el populismo mexicano ha logrado una prolongación tan extraordinaria.

III

Planteémoslo de la siguiente manera: hasta antes de su etapa propiamente industrial, los años cincuenta, México fue conformado por tres grandes influjos que poco tienen que ver con la historia democrático-burguesa clásica y con la historia de las hegemonías burguesas o proletarias de la Europa oriental u occidental: primero, por un volcán plebeyo dispuesto a estallar ante la más mínima fisura del orden, es decir por una lógica societal popular y masiva; segundo, por un secular estado de guerra interno y externo, real o potencial, y tercero, aunque en cierta forma derivado de los anteriores, por una constante erosión del poder de sus clases superiores. Con respecto al primer factor baste recordar la sangrienta guerra de independencia sin paralelo en América Latina y la consecuente huida de los capitales españoles, y sin duda la revolución de 1910: un millón de muertos. Combinando bien las potencialidades del primero, el segundo factor puede ser perfectamente ejemplificado al recordar las guerras de reconquista española, la pérdida de Texas en 1836 y de los estados del norte doce años más tarde, la guerra entre liberales y conservadores que hizo crisis en 1857, luego la guerra contra España, Inglaterra y Francia al ordenar Juárez la suspensión del pago por deudas al exterior; guerra, en fin, contra el emperador Maximiliano en los años sesenta... Concomitantemente, varias sangrías sufrirían las clases altas de este país (y el clero como parte de ellas) prensadas entre el desbordamiento plebeyo atizado por las guerras civiles y exteriores y por los Estados despóticos que de ahí surgieron, producto de la lógica del más fuerte.

En efecto, se trata de una historia donde, como resultado de lo anterior, sólo un Estado despótico asentado sobre su herencia guerrera fue capaz de unificar un territorio siempre amenazado y mutilado por las grandes potencias, un territorio con una geografía abigarrada, inconexa y profundamente heterogénea que al entrar en combinación con las exigencias de los polos industriales originarios dio como resultado una economía primaria exportadora diversificada (!). Es pues una historia en que a la debilidad y a la parcelación de las clases dominantes derivadas de lo anterior vinieron a sumarse las deformaciones típicas del enclave minero, cuando los empresarios locales ya no fueron capaces de asegurar los requerimientos de capital que la tecnología minera exigió en el nuevo orden imperialista y también fueron debilitados como clase nacional por las compañías extranjeras. En fin, pese a lo anterior, llegó un momento en que la historia de México pareció asemejarse a la de América Latina: fue cuando el enorme auge de la economía primaria-exportadora hizo renacer de las cenizas a las clases dominantes (cuyos grupos de punta dieron

visos de dinamismo atraídos por la modernización industrial y agraria). Entonces, la alta burocracia porfirista, los llamados “científicos”, herederos de la “lógica de enclave” y del Estado fuerte, una clase política en vías de aburguesamiento y transformación empresarial, pero abiertamente excluyente (puesto que de su control sobre el Estado dependía su fuente de capitalización), entró en conflicto con otras oligarquías en ascenso: las del norte del país, más ligadas a su carácter de “productores y exportadores nacionales” cuya fuente de capitalización provenía básicamente de su quehacer económico y no de un control directo del Estado ni de las concesiones al capital extranjero, etcétera. Así, se produjo una lucha interoligárquica a través de la amplia alianza que esta oligarquía norteña logró concretar con los sectores medios totalmente excluidos y con el campesinado indígena del centro aceleradamente despojado de sus tierras. En fin, al prolongarse esta lucha interoligárquica los contendientes debieron recurrir cada vez más al campesinado y a los sectores populares en busca del triunfo, lo que provocó que el carácter del conflicto derivara en una guerra antioligárquica. Fue necesario ir demasiado lejos en las promesas a las clases populares por las exigencias propias de la guerra. Al final de la lucha y como resultado natural de ésta el campesinado quedó, a pesar de todo, organizado autónomamente sin ningún proyecto de sociedad global para el futuro. La derrota de los ejércitos campesinos por la casta militar triunfante y su oficialidad pequeñoburguesa sólo pudo llevarse a cabo mediante el asesinato de sus líderes, pero debiendo aceptar inevitablemente las demandas populares, sin lo cual no era posible una pacificación. A partir de ahí, ya lo veremos, se repetiría el esquema de solución a los movimientos sociales: a) represión a toda forma de acción opuesta al sistema imperante, sobre todo si se trata del abierto enfrentamiento y la ruptura del orden; b) muerte o desmantelamiento a sus dirigencias, y c) solución a sus demandas y reincorporación del actor de oposición y de las causas de la lucha. En el caso del campesinado de la Revolución mexicana sus demandas implicaron, aunque lentamente al principio, la puesta en práctica de la Constitución de 1917, donde destaca por encima de todo el desmantelamiento de la oligarquía terrateniente a través de la reforma agraria. Este último dato, aunado a la lógica de la guerra, a la anarquía, a la destrucción que imperaron en el país durante los largos años de la revolución, al surgimiento de los hombres fuertes de la guerra y su manejo sobre las masas en efervescencia, tuvieron como resultado la destrucción de ese inicio de sociedad civil que México había logrado apuntalar durante su inserción periférica al mercado mundial (el porfirismo). Las clases dominantes fueron, una vez más en nuestra historia, barridas por la marejada popular-nacional.

Ante tal panorama de atomización, que ni siquiera puede ser calificada de crisis de hegemonía de las fuerzas sociales sino más bien de *profunda debilidad de la sociedad civil*, vemos surgir a la casta militar triun-

fante como un acto incontestado: la menos débil de las fuerzas nacionales si se quiere, pero por ello mismo dueña de una situación que le permitió —por así decirlo— hacer la historia desde arriba y no por primera vez.

Obviamente es imposible profundizar en esto; el ejemplo sólo nos sirve para mostrar cómo ocurrió que cuando las subsecuentes facciones en pugna echaron mano de los sectores populares (campesinos y obreros), la lucha revolucionaria no sólo despertó el volcán plebeyo tan característico de este país, sino que obligó al grupo triunfante (que poco tenía ya, después de tantos años de lucha, de grupo económicosocial [clase] y mucho de casta militar [élite política dirigente]) a hacer efectivas las innumerables promesas de mejoramiento a las masas, sin lo cual era imposible su consolidación y el retorno de la paz. Así, puso en marcha la Constitución de 1917 y con ella un primer jalón de la reforma agraria, a la vez que puso en jaque a las compañías extranjeras, principalmente las que explotaban el petróleo.

El camino no estuvo exento de peripecias: la casta militar triunfante no sólo tuvo que destruir a su ala radical campesina, sino que también debió enfrentar ciertos intentos contrarrevolucionarios a su derecha y una lucha de facciones en su seno que fue la nota dominante de los años veinte.

Pero lo que importa destacar es que este episodio activó una vez más la lógica social y política mexicana: erosión y debilitamiento de las clases altas, principalmente agrarias, y fortalecimiento del actor estatal, de un principio de orden necesariamente autoritario producto de la guerra. Cuando el afluente mexicano derivó en el tumultuoso cauce popular y nacional que se abrió en la entreguerra y se ensanchó con la crisis económica mundial de los años treinta (en América Latina llevó el nombre de populismo), nuestro país había sido largamente preparado para convertir a tal fenómeno en algo mucho más radical, mucho más nacional, mucho más popular y mucho más estatal.

Esto fue el cardenismo, un período más en la historia independiente (el cuarto) de movilización de masas, centrado en la reforma agraria integral y en la nacionalización del petróleo, que hizo tabla rasa de las oligarquías y que se encargó de supeditar, aunque sólo fuera por un tiempo, a otras fuerzas sociales que de manera titubeante intentaban reorganizarse después de la conflagración. De entre ellas, el proletariado parecía despuntar en los años veinte, asentado, hasta cierto punto, en su composición de enclave. Pero la nueva etapa tuvo como resultado el franco desbordamiento de su identidad clasista, y sus organizaciones fueron corporativizadas por el Estado y por el partido del Estado.

Se trata pues de una historia que a su paso vio renacer tercamente la pirámide popular-nacional hasta enclavarse en pleno siglo **xx**; de una historia que hasta el cardenismo poco tenía que ver con la democracia. Y sin embargo también se trata de una sociedad que súbitamente, en dos decenios, se ve enfrentada de la manera más violenta con el crecimiento

urbano, la industrialización, los sectores medios demócrata-consumistas, una clase obrera en busca de su autonomía, una burguesía cuyo poder económico, al entremezclarse con el capital extranjero, es irrefrenable y cuya organización es creciente (aunque haya quedado desahuciada como clase hegemónica integral); una sociedad, en fin, que se desarticula en varias lógicas sociopolíticas que coexisten tercamente.

Aquí está lo fundamental: a pesar de que este ejemplo poco tiene que ver con una génesis cultural democrático-burguesa, a partir de los años cuarenta se generaron un desarrollo propiamente industrial-capitalista, una urbanización y en general una modernización acelerada para convertir a México, en tres decenios, en un país que pudo calificarse, al menos hasta principios de los ochenta, de pujante desarrollo relativo.

IV

Esto explica el calificativo de sociedades desarticuladas, es decir, sociedades que desde el punto de vista cultural, político y, en una palabra, societal, distaban mucho de poseer los atributos que sirvieron de invernadero para el ascenso y la consolidación del capitalismo en los países hoy desarrollados (siendo el carácter piramidal, autoritario, estatista y paternalista del cardenismo la mejor prueba); pero que por el simple hecho de poseer respetables dimensiones geopoblacionales (un mercado interior suficientemente amplio y en constante crecimiento en términos absolutos), pudieron industrializarse y modernizarse en forma acelerada en unas cuantas décadas (la India sería el caso más espectacular). Precisamente por esto se trató de un proceso profundamente desequilibrado, demográficamente explosivo (de ahí el término desarticulación), pero pese a ello efectivo en términos de desarrollo económico; y es que en el período monopolista del capitalismo la génesis social, cultural y política puede ser fácilmente sustituida por el capital y la tecnología acumulados a nivel mundial.

Ahora bien, si desde el punto de vista de la base productiva estas sociedades funcionan sobre una plataforma económica única, continua, que extrae excedentes de los puntos de mayor atraso canalizándolos hacia los grandes emporios del capital industrial y financiero, desde el ángulo propiamente sociopolítico y cultural la homogeneización no es tan evidente. En efecto, aquí, como en el caso de los países "homogéneos", tardíamente desarrollados en el capitalismo, las fuerzas y clases sociales propias de la etapa industrial se ven afectadas por la diversificación y la estratificación que provocó el elevado desarrollo monopolista (donde las clases altas se dividen entre burguesías asociadas, nacionales y monopolistas o competitivas y otro tanto sucede con el "estándar de vida" de la clase obrera). Pero más allá de esta característica general del desarrollo tardío-monopolista, en los países desarticulados, y en particular en el ejemplo que ahora nos ocupa, se suma un poderoso elemento que parcela de manera más

radical los impulsos sociopolíticos provenientes de la sociedad civil en su relación con el Estado. Y es que el meteórico tránsito, en sólo treinta años, desde una sociedad de masas, piramidal, en que el Estado es el agente de cohesión represiva (agente hegemónico), hacia una sociedad donde aparentemente predomina la industria y la modernización en general, nos coloca frente a una realidad necesariamente dislocada. Es poco treinta años de modernización para enterrar una historia secular, más aún cuando se trata de un proceso excluyente como es el caso del desarrollo capitalista de nuestro tiempo.

Así, pues, la pirámide popular nacional (estatal) que coronó la historia mexicana bajo el cardenismo no es un hecho del pasado: subsiste asentando su extensa base en la sociedad tradicional, en ese campesinado populista, pero ampliándose también al asegurar su futuro en las crecientes bolsas del pauperismo urbano, ya hoy impresionantes. Al menos en el caso de México, éstas constituyen el mayor agregado poblacional, más grande incluso que la población campesina y con tasas de crecimiento incomparablemente más altas puesto que en buena parte los pobres de la ciudad crecen a expensas de esa población campesina. No es aquí el momento ni contamos con el espacio suficiente para analizar el comportamiento sociopolítico de los marginados urbanos; pero no cabe duda de que las ingentes necesidades donde se inscribe su existencia constituyen un campo de cultivo para las formas de representación autoritario-paternalistas y quedan a merced de los hombres y aparatos en que se concentra el poder, dado que son éstos los más facultados para regularizar la propiedad de su pequeño lote, instalar una escuela, atraer los servicios urbanos, etc. De esta manera, amenazan con producir de manera creciente, en términos relativos y absolutos, la base de masas del autoritarismo, es decir, la lógica masivo-popular: lo contrario casi punto por punto del contenido implícito de los postulados propiamente democráticos e incluso clasistas.

Recurramos, para concluir esta parte, a un esquematismo realista: junto a esta lógica popular-nacional (I) que subsiste y se amplía como resultado de la explosión demográfica, emerge con vigor otra lógica que aquí llamaremos democrático-clasista (II). Esta última está compuesta, en una de sus vertientes (1), por las clases medias concomitantes con todo proceso urbano o de modernización: su lógica sociopolítica en tanto actores consumistas, posesivos e individualistas, es inmediatamente antiautoritaria, pluralista, si tomamos en cuenta el marco hiperestatal en el que nació. Los movimientos magisteriales, médicos y estudiantiles durante los sesenta en contra del autoritarismo diazordacista, así como las reacciones contra los actos "socializantes" promovidos por el echeverriísmo en los años setenta, muestran bien su voluptuoso carácter posesivo e individualista, y, sólo en esa medida, "democrático" y pluralista.*

* Aquí el término democracia —más cercano a los atributos posesivos-indivi-

Pero la otra vertiente (2) de esta lógica de lo moderno está más propiamente ligada a la lucha de las clases fundamentales: por una parte (a) nos habla del fortalecimiento de la iniciativa privada, nacional y extranjera, y de la enorme presión que el capital monopolista internacional es capaz de ejercer sobre las opciones del desarrollo (sin que debamos confundir ese poder económico —¿hegemonía en lo económico?— con la concepción integral de la hegemonía). Por otra parte (b), la clase obrera también se fortifica en su organización, fundamentalmente a través del sindicalismo. Sin embargo, la gran dificultad a este respecto se manifiesta en torno a su marcada heterogeneidad: por un lado, tributaria del paternalismo estatal en su amplia masa poco calificada (afiliada al PRI a través de la Confederación de Trabajadores Mexicanos); por otro lado, mimética de las actitudes de consumo cultural y políticas de los sectores integrados (pensemos, con todas las salvedades, en esa porción de la clase obrera que pertenece a las empresas monopolistas extranjeras y asociadas al capital nacional e incluso en algunas empresas bien remuneradas del sector estatal en los rubros clave de la economía).

Pero, en lo general, si dejamos de lado al amplio sector obrero de baja calificación, el proletariado también reivindica de manera irreversible su inalienable derecho a la independencia frente a los aparatos corporativos tratando de sobreponerse a la heterogeneidad que lo caracteriza y, por ello mismo, con una plena conciencia de que la construcción de su hegemonía en el seno de los amplios sectores populares no es evidente, pues en sociedades como la nuestra la destrucción del único actor capaz de cohesionar al todo (el Estado) no es un acto sencillo.

Así, pues, esta lógica democrático-clasista (II) tiene en común el ser acérrima adversaria de nuestra herencia piramidal en la medida en que, por cualquier lado que se lo mire, los pilares del Estado fuerte están siendo constantemente erosionados por las demandas —con signos diversos y en otro plano antagónicos— provenientes de la clase obrera, el capital y los sectores medios.

En estas sociedades, el movimiento obrero se convierte en piedra de toque, es cierto, pero precisamente porque en él se resume la profunda desarticulación y heterogeneidad de la sociedad en su conjunto. Por una parte reivindica el derecho de la sociedad civil en su cauce de robustecimiento frente a un Estado que la oprime; en ese sentido, el movimiento obrero se siente solidario de un principio antiestatal y busca sus alianzas con la lógica propiamente democrático-ciudadana, con la sociedad mejor integrada y antiautoritaria: actúa pues fuera de la pirámide y contra ella, contribuyendo a pertrechar ese hemisferio ya calificado como democrático-clasista. Pero, paralelamente, al no saberse portador del modelo de recambio, o sea, al no sentirse garante del eventual nuevo orden, carece de

dualistas-antiautoritarios de las clases medias y altas— no corresponde exactamente al manejo en la acepción de “democracia emergente”.

fuerzas para atacar frontalmente, al mismo tiempo, a su enemigo que es trasnacional y al Estado.

Así, la coherencia del proyecto clasista llega rápidamente a sus límites, pues al llevarse a cabo la acción obrera y la organización autónoma de esta clase, necesariamente se va hacia el debilitamiento del Estado y ello coloca al proyecto clasista ante una pérdida de legitimidad acelerada o al menos ante una pérdida de poder. En efecto, dejando de lado, lo que no es poca cosa, la fuerte represión gubernamental sobre los sectores más combativos del proletariado, los aparatos organizativos de la clase obrera se ven enfrentados a un dilema: la conveniencia de llevar a fondo una desestabilización política cuando, por un lado, las bases proletarias mismas son profundamente heterogéneas y la capacidad de hegemonizar el proceso de desorden social es muy incierta y, por otro, la desestabilización puede abrir paso a la intervención militar, apoyada en los sectores burgueses, burocráticos y democrático-ciudadanos aterrados por el desorden político, conduciendo así a un Estado no sólo abiertamente favorable a las clases dominantes (lo que ya es el caso en los últimos años), sino además brutalmente represivo.

Incluso sin llevar las cosas a este extremo, que para muchas sociedades latinoamericanas ya forma parte de su historia, lo cierto es que el proceso de autonomización de la clase obrera y de su proyecto histórico rápidamente es atacado por el discurso político dominante calificándolo como un proyecto antinacional y particularista: antinacional, porque al conducir a la desestabilización pone los intereses de una clase por encima de los intereses nacionales en sociedades donde la dominación y el intervencionismo de las grandes potencias y sus ramificaciones (las empresas multinacionales) están listos para incrementarse ante cualquier amenaza seria del orden; particularista, porque los sectores obreros que se encuentran en mejores condiciones para poner en práctica su independencia política son sin duda los sectores de punta y los sectores clave de la clase obrera. Son, pues, sectores bien integrados cuyos salarios se encuentran muy por encima del salario que priva en el conjunto de las capas populares.

El manejo de los dos elementos anteriores, nacionalismo y particularismo, amenaza a la movilización obrera con el aislamiento y la pérdida de legitimidad y la coloca en una situación incómoda para hacer progresar una política de fusión o simplemente de alianza con el resto de las clases populares.

Así, la "razón de Estado" se asienta en su base masivo-popular y en el principio nacional (lógica nacional-popular), y ataca a la acción clasista por un supuesto particularismo que tiende a debilitar el principio de unidad nacional en sociedades siempre amenazadas en sus intereses por las grandes potencias.

La primacía de la dimensión nacional sobre la dimensión clasista, la heterogeneidad profunda de la clase obrera y el hecho de no sentirse por-

tadora de un modelo de recambio y de una capacidad dirigente de las masas populares una vez que el principio del orden llegue a resquebrajarse, colocan al movimiento obrero ante serias dificultades de identidad, de organización, de continuidad y de coherencia en general. A este cuadro se suma el trauma legado por la experiencia de otros países y que podría vivirse en forma aún más dramática en el nuestro, pues es sabido que al ponerse en cuestión el principio de autoridad, como resultado de la acción y las presiones de los sectores integrados (democrático-clasista), los desenlaces más inmediatamente previsible, en el caso que nos ocupa, son, por una parte, la preservación por los medios más brutales de los intereses inmediatos de las clases dominantes o, dicho de otra manera, la restauración del orden por medio del Estado dictatorial (dictadura militar, etcétera) y, como la otra opción, tan cara a nuestro pasado de masas, la crisis "desorganizada" y la rebelión. Sólo como opción más lejana se entrevé un itinerario en el que este tipo de acciones conduzcan hacia un perfeccionamiento democrático —autorregulación— debido a la interacción de las fuerzas sociales en el plano de la sociedad civil, y también parece lejana la posibilidad de que una lucha clasista en el sentido más estricto ordene la dinámica de la acción (lucha de clases, crisis organizada), incluso tomando en cuenta que toda revolución es un acto de masas.

No podemos extendernos más en este punto, pero queremos señalar que en los casos de desarticulación profunda, como en México, el Estado deviene, de manera aún más aguda que en los países de modernización temprana, el único punto de cohesión y de coherencia, el único capaz de ligar las manifestaciones y exigencias derivadas de una lógica clasista con aquellas otras de carácter masivo-popular y, en fin, con las que responden a un comportamiento sociopolítico propio de los sectores mejor integrados al desarrollo, a la lógica democrático-consumista (sin que lo anterior permita suponer que cada una de estas manifestaciones y los agentes que las expresan puedan aparecer en forma pura o aislada: todo movimiento o manifestación social es una amalgama de estas lógicas incluso si alguna de ellas predomina).

Lo mismo puede ser dicho de otra manera: en las sociedades tardío-desarticuladas, la voluntad estatal es la única capaz (pero en muchos casos ni siquiera ella lo es) de imprimir alguna coherencia a impulsos sociopolíticos tan contradictorios como el impulso nacional (nacional-popular, nacional-estatal), el impulso clasista y el impulso democrático-modernizante. El hecho de que el Estado logre realmente esta función depende, claro está, de la herencia sociopolítica. Allí donde el principio nacional-popular ha sido muy poderoso (por la constante amenaza exterior, por la debilidad de las clases altas, por el potencial plebeyo de desbordamiento de lo establecido), el Estado será capaz de imprimir un orden con consenso.

Así, por ejemplo, a pesar de que actualmente en México el régimen

vuelve la espalda a su “tesoro de masas” (reniega de su pasado populista en nombre de la eficiencia tecnocrática), son esas mismas masas y nuestro eterno adversario exterior (los Estados Unidos, la guerra centroamericana y nuestro petróleo) quienes mantienen vivo y con más fuerza el principio popular-nacional y siguen otorgando coherencia a nuestra organización social y política.

El eje nación (Estado-pueblo) aún ordena y supedita al eje clase (burguesía-proletariado) y al eje modernización o democratización (sociedad civil-Estado). Digamos, finalmente, con respecto a esta última manifestación, que el principio nacional-estatal impera de tal forma en un caso como el mexicano que prácticamente vacía de todo contenido a cualquier acción que intente expresarse en el plano más estricto de lo social. Incluso los movimientos sociales que mejor representaron este último impulso (demócrata-modernizante), como el movimiento estudiantil de 1968, no pudieron mantenerse ni por un instante en su medio de origen —la sociedad civil—, asegurando así cierta cobertura y continuidad: se lanzaron de manera ciega y de inmediato contra el Estado, se sobrepolitizaron (incluso más allá de lo que pudiera suponerse, tomando en cuenta que, por su carácter autoritario, el Estado es su adversario natural). Pero en ese impulso democrático de ir contra el Estado en pro de un mayor poder para la sociedad civil terminaron enfrentándose a muerte con su adversario; en realidad, terminaron no sólo yendo contra el Estado sino yendo por él, buscándolo, según su lógica, como paso previo para democratizar a la sociedad.

V

Lo anterior nos conduce al punto que nos interesa destacar y que se refiere a las causas de la prolongada permanencia del síndrome populista en México y el abrupto cambio de éste esquema a partir del año 1982. En efecto, esta forma de enganche entre la sociedad y el Estado por medio de un dilatado sistema político, de un manipulador y paternalista sistema de participación e influencia en los aparatos públicos, se explica por la herencia evocada arriba, es decir, por nuestra historia de Estado fuerte; pero a ello habría que agregar otras dos casualidades históricas: *a*) el Estado se excedió violentamente, por su propia matriz autoritaria, cuando en el año de 1968 los sectores medios exigían canales de participación más democráticos y tuvo que pagar su error con varios años de flexibilidad participativa (a esto hay que resumirlo con el nombre de echeverriísmo), y *b*) en el sureste del país apareció una reserva petrolera que permitió una bonanza financiera para prácticamente todos los sectores de la sociedad y que tuvo el efecto de prolongar, al menos por un sexenio, el espejismo populista. Así, la apertura democrática y la reforma política le dieron aliento al pacto nacional-popular-estatal-desarrollista durante

doce años más, sin por ello entrar en contradicción con las clases altas y la burguesía trasnacional.

Pero dejemos el plano del Estado y analicemos el asunto desde la perspectiva de los movimientos sociales. Veamos cuáles han sido las oportunidades de la democracia, de la lucha de clases, de las rupturas del orden y de las corrientes y organizaciones que se han colocado en la oposición al Estado en los quince años anteriores a la crisis de 1982 para entender por qué la exigencia democrática no puede ser hoy la misma que en aquellos años. Partamos de 1968 para no complicar mucho las cosas y tomemos como hilo conductor a aquella lucha social, poniendo el acento en la protesta de los sectores medios ya que ellos constituyen un actor privilegiado en cualquier discusión sobre la democracia.

“El movimiento estudiantil y popular de aquel año significó un parateguas de la historia mexicana.” He ahí una de las afirmaciones más comunes en nuestro país. Sucede a menudo que el tiempo se encarga de arrinconar en el anecdotario de la generación vetusta a las declaraciones que en su época fueron verdades contundentes. Es difícil que esto suceda en el caso de aquel movimiento del 68, y sin embargo, debemos preguntarnos qué es exactamente lo que cambió el 68 en el quehacer social, político y cultural de nuestro país. ¿Qué cambio, que no hubiera cambiado por sí solo en los quince años que nos separan ya de aquel momento? Son quince años que incluyen una nueva matanza estudiantil el jueves de Corpus, 10 de junio de 1971; la vigorosa aparición de la guerrilla urbana y rural, y su no menos espectacular aniquilamiento a sangre y torturas carcelarias. Hubo un resurgimiento del sindicalismo obrero independiente encabezado por los electricistas, y su tajante revés, que tuvo un correlato en el ague del sindicalismo en las universidades. Hubo la apertura democrática y la reforma política como diques del caudal todavía bien controlado de nuestra historia posrevolucionaria. Hubo cuatro años de petróleo, “crisis de riqueza” que terminó con una crisis de realismo y la nacionalización de la banca como acto *kamikaze* de un gobierno ante su inminente paso a la historia como el régimen de las ilusiones. Hubo, en fin, en el plano latinoamericano, la caída de la Unidad Popular chilena, la proliferación de las dictaduras militares y el vigor de la revolución centroamericana junto a la peste reaganiana. ¿Hay alguna permanencia, un hilo conductor que permita rastrear a lo largo de esos quince años y de tantos acontecimientos la continuidad de aquella lucha? Me refiero a alguna expresión no controlada o conducida por el Estado, porque nada más ajeno a ese control o a esa conducción buscaban los jóvenes de aquel entonces.

Dicho de otra manera: ¿dónde quedó la generación radical del 68? O bien, si se prefiere destacar el hecho ingrato de su atomización orgánica, política e ideológica: ¿dónde no quedó? La generación del 68 está en las

manifestaciones centrales de estos tres lustros, pero tal vez por eso mismo no se encuentra en ninguna corriente, en ninguna parte que pudiera circundarse en un mapa amplio de nuestra sociedad. Podría decirse, cuando mucho, que la gran mayoría de sus miembros destacados se dedicaron a la política, lo que en un país como México, donde todo está vuelto hacia el Estado, sería una afirmación poco útil. Pero es un rasgo característico de la historia de las luchas en nuestro país: lo que una vez fue identidad, unidad de fuerzas ante un adversario definido e imponente (el Estado en la época de Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz mismo), se vuelve luego explosión de tendencias, absoluta falta de continuidad, fragmentación de orientaciones cuya precaria asociación es la secuela fiel de su heterogeneidad original. El adversario, el Estado, conoce bien el mecanismo para desmantelar estas luchas: reconciliación con alas moderadas una vez que se ejerce e imprime en la psicología colectiva el sello indeleble de la represión.

La identidad del 68 parece haber desaparecido bajo el influjo apaciguador de esta lógica en la que ya no pensamos, o pensamos poco, pese a todos nuestros anhelos democráticos y a todas nuestras fantasías dirigidas a crear movimientos, aparatos, "espacios" intermedios entre las luchas sociales y la estructura del orden, o simplemente entre la sociedad masificada y dispersa y las instituciones preestablecidas, alineadas férreamente bajo la hegemonía estatal.

Así, las luchas sociales en el México del último cuarto de siglo, con la relativa excepción del movimiento ferrocarrilero de 1958 y del estudiantil de 1968, pueden calificarse como luchas dependientes de la estrategia que el Estado les marca y las ha conducido dentro de los límites que éste define como tolerables. Las que han llegado a una mayor ruptura se han situado en el espacio abierto por la pugna entre fuerzas o personajes poderosos de la "familia revolucionaria". Tal fue el caso de la guerrilla de Genaro Vázquez e incluso de la de Lucio Cabañas en Guerrero, aunque a primera vista esos movimientos puedan calificarse como de franco enfrentamiento desde una posición exterior al orden establecido. Esas luchas se han redefinido sustancialmente con el paso de uno a otro sexenio y lo mismo ha sucedido con el comportamiento de los grupos, organizaciones y partidos de la oposición.

Por ejemplo, el movimiento estudiantil de los años sesenta es "el producto", en algún nivel, pero de manera decisiva, no sólo de los bajísimos presupuestos con que el Estado castigó a las universidades, sino también de la "cerrazón" de las instituciones políticas a nuevas formas de participación. Fue el estilo característico de Díaz Ordaz y afectó directamente a los sectores medios ilustrados. Podemos estar también de acuerdo en que el fin de aquella identidad de 68 —alianza de sectores tan disímolos como fueron los preparatorianos, las autoridades universitarias, los grupos de profesionistas y naturalmente la izquierda— fue algo que se consiguió en el echeverriísmo, ante la incredulidad e incluso el malestar de

muchos (de ahí la guerrilla urbana y la mota). El echeverriísmo diagnosticó correctamente las causas de aquel malestar y aplicó las consecuentes medidas correctivas, a las que bautizó con el nombre de “apertura democrática”. Se abrieron entonces canales directos de acceso a los puestos de mayor responsabilidad política para aquella camada de jóvenes “contestatarios”; empleos incluso en el grado de ministro y al margen, por lo regular, de los gastados mecanismos y la jerarquía del partido oficial. La apertura consistió también en que el ejecutivo y la alta burocracia pública dieran un mejor trato a las universidades y una sustancial mejoría de sus subsidios, así como en que manejaran un discurso de corte popular y nacional más actualizado, con efectos prácticos visibles.

Inmediatamente se podría desprender que existe una relación de ida y vuelta entre la acción social y la política estatal y que la primera mueve a la segunda. En efecto, el movimiento de la sociedad en los sesenta terminó modificando sustanciales rasgos del sistema político en los setenta. Sí, pero pese a que el 68 fue el movimiento social mexicano más importante desde el triunfo de la revolución cubana (por dar una referencia externa) y pese a que sus efectos fueron evidentes en el armazón de la política nacional, los cambios que produjo tuvieron lugar cuando el movimiento, como tal, había desaparecido y su organización se había desmantelado en su dinámica. Lo habían reprimido violentamente, no sólo en aquel otoño sangriento y olímpico sino hasta bien entrado el nuevo gobierno, como se recordará con la matanza del jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. La sociedad tuvo entonces expresión en la política pero al precio de la muerte de sus movimientos a los que, en México, primero se les reprime o controla y sólo después se les escucha.

En algún momento de 1972, Jesús Reyes Heróles hizo público el beneplácito del gobierno por la creación de un tipo de sindicalismo que, orientado por un principio democrático, marcara su independencia con respecto a las grandes organizaciones obreras. Iban a dar principio los cuatro años más floridos del sindicalismo independiente —que lo fue— que aprovecharía las pugnas de los albores del sexenio entre el Presidente y el líder de la CTM, Fidel Velázquez, para definir con cierta comodidad su espacio de acción y su proyecto político. La “forma sindicato” fue la vía por la que el Estado decidió encauzar a las manifestaciones laborales y a las organizaciones de oposición que quisieran convertirse en interlocutores válidos.

Entre 1971 y 1972, muchos miembros de la camada del 68, recién salidos de la cárcel, intentaron aglutinar grupos y echar a andar publicaciones para la eventual formación de un partido político. Tal fue el caso, desde entonces, de Heberto Castillo y de la revista *Punto Crítico*. La nueva camada de jóvenes políticos que surgió en los setenta (con la postrevolución cubana, el postdesarrollo compartido, los antipriístas que ya no hacían política en el Hotel del Prado) descubre que el movimiento estu-

diantil constituye una forma extrema de ilegalidad que termina en la ruptura total y en la represión (1968). Descubre también que los partidos de izquierda, entonces ilegales, llevan consigo una forma hiperideologizada de hacer política (maoísmo, trotskismo, estalinismo, guevarismo, etcétera) y encuentra en la vía sindical un canal más directo hacia la clase trabajadora; un canal más pragmático y más mexicano de hacer política, un trampolín para impulsarse de la revuelta estudiantil radical a la "política real" sin dejar de ser oposición, sin "venderse al sistema". Había pues no sólo una apertura desde el Estado, sino también, complementariamente, una demanda hacia la "forma sindicato" por parte de los actores de esa camada de los sesenta (aunque ellos hubieran preferido la "forma partido" desde el inicio). De ahí el auge del sindicalismo universitario y de todo el sindicalismo independiente.

Pero al cambiar el gobierno en 1976, el terreno sindical independiente perdió impulso. No pudo responder a la política de mano dura antisindical, ejemplificada en el golpe a la Tendencia Democrática de los electricistas y al sindicato universitario con la toma policial de la Ciudad Universitaria en 1977. Por otro lado, el nuevo gobierno inauguró una reforma política que privilegió la "forma partido" mediante la legalización de los partidos de izquierda en el marco del sistema parlamentarista. Se hacía pasar a segundo plano la "forma sindicato" que el echeverriismo había impulsado y que hacia 1976 parecía una fuerza inconveniente para los objetivos de control del sistema político y, en general, para la continuidad de las bases de sustentación del Estado mexicano. Así, luego de los dos años críticos previos al *boom* petrolero en que las demandas sindicales se perfilaron como una amenaza para la estabilidad del sistema, los partidos y las organizaciones de oposición, entonces cercanos al medio sindical, fueron canalizados al parlamentarismo (con cierta violencia pero también echando mano de la cooptación: la época dorada del petróleo simplificó la maniobra). Con estas afirmaciones no queremos negar la tendencia de la clase obrera, de los trabajadores en general y de los sectores medios a independizarse de los aparatos de corte patrimonial, piramidal, del Estado. Nuestro argumento sólo subraya la capacidad aún inagotada de la élite política dirigente para seguir encauzando estas expresiones de independencia por canales y modalidades preestablecidas desde las alturas, y, paralelamente, tratamos de llamar la atención sobre las causas que han prolongado tan asombrosamente el espectro populista mexicano.

Cuando el sindicalismo amenazó con convertirse en una oposición vigorosa al PRI-Estado, el propio actor estatal decidió separar sindicato y partido abriendo el parlamento. Éste pareció un terreno mucho más adecuado para una oposición que habían formado los sectores medios ilustrados llevándose tras de sí, hacia el parlamentarismo, a la dirigencia sindical más lúcida.

A cambio de este "paso a la vida política nacional y a la influencia reconocida" se rompieron las ligas entre la clase obrera en sentido estricto y el sindicalismo independiente de las clases medias ilustradas. Se levanta un muro entre el SUTERM y el STUNAM, para emplear una imagen, e incluso dentro del STUNAM, entre trabajadores administrativos y académicos, y entre una universidad y otra, al no ser reconocido el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUNTU).

Antes de abordar las medidas del actual sexenio al respecto, completemos nuestra hipótesis original haciendo notar que los grupos, las organizaciones, las corrientes, los partidos de oposición y los movimientos sociales propiamente hablando, sufren severamente con cada uno de estos cambios que promueve la política estatal. En la medida en que todas estas formas de la oposición no son monolíticas, no actúan como una fuerza disciplinada y no cambian su dirección y su posición política e ideológica como un organismo unitario, los desgarramientos que se generan en su interior son muy severos, tanto como diversas sean las respuestas a la cambiante política estatal: una línea acepta las nuevas reglas del juego, otra considera a la primera como claudicante, "entrista", reformista, etcétera. El resultado más palpable en tal estado de cosas es la discontinuidad, el desmantelamiento de los aparatos y las instancias de resistencia social que con tantos sacrificios fueron constituidos.

Qué continuidad, qué autoidentificación, qué posibilidad de recurrir a los mismos espacios y mecanismos pueden tener quienes hace quince años se enfrentaron casi con las armas al Estado, luego estuvieron presos, fueron "motos" o guerrilleros, a continuación se "regeneraron" al reivindicarse con los trabajadores en el sindicalismo, más recientemente se fueron a los partidos y se encandilaron con el parlamentarismo (o se pelearon con aquellos que partieron hacia allá) y hoy no saben si ser partido, parlamento, sindicato, lucha campesina, lucha municipal, solidaridad con Centroamérica, o nada de eso y simplemente volver a ser oposición sin más, sin mediación, y siempre en total ruptura? Es algo así como no ser reconocido en nada de lo organizado, de lo dicho, de lo vivido, de lo militado, de lo actuado, sino algo nuevo cuya definición vendrá de cada burocracia o tecnocracia debutante, tan innovadora en todos los terrenos.

Pero no todo viene de arriba. La cultura política de una sociedad se forma históricamente. Si, como en el caso de México, por razones geográficas, étnicas, de guerras civiles o exteriores se logra perfilar un Estado poderoso en un plazo histórico prolongado, incluso secular, esa experiencia definirá una matriz de relación entre sociedad y Estado, una cultura política que "impregna" en su conjunto a la sociedad en cuestión, no sólo los "poseedores" del Estado, sino también quienes se les oponen, fincan sus acciones en una misma axiología, establecen objetivos de conquista comunes y reproducen una retórica y unas formas organizativas similares aunque ambos bandos se reconozcan como antagónicos en la política y con

ideologías particulares que se excluyen recíprocamente. En un país con un fuerte Estado ancestral, la acción política de las élites —ya sea en el gobierno o en la oposición— tiende a organizarse en torno al lugar desde donde todo parece posible (el vértice) y ese afán compartido se reproduce y alimenta la matriz social, cultural y política históricamente formada.

Se forman así dos paradojas peculiares de la historia mexicana:

La primera es que las luchas sociales, que están fuertemente orientadas hacia el Estado y que no encuentran organismos, espacios o canales intermedios para hacer política con cierta permanencia y continuidad, generan muy pronto una sobrepolitización. Es decir, que ante la expectativa de no ser reconocidas y entrar rápidamente en una dinámica de desgaste, de escisiones internas o de aniquilamiento represivo, prefieren apostar a ganar todo o a perderlo todo, a desquiciar el orden en un incontrollable desencadenamiento de malestares (cuyas consecuencias pueden ser mortales incluso para el movimiento detonador), o a destrozarse estrellándose contra el muro del Estado y su arsenal represivo. Entonces, en México parece operar una especie de lógica en la que un actor suicida (las luchas sociales y su dirigencia) y un actor asesino (el Estado) se enfrentan y convierten en catástrofe casi irremediable los momentos en que se manifiesta la acción directa de la sociedad. A diferencia de otras matrices del quehacer latinoamericano, en México parece haber una elevada calma social y política, y lo que en realidad existe es una constante eferescencia de movimientos rápidamente truncados, cooptados, divididos, resueltos.

La segunda es que los movimientos sociales que surgen en nuestro país luchan contra la exclusión y la opresión que la élite política ejerce, sea en su escenario como gobierno central o en sus ramificaciones caciquiles. Pero si la dirigencia que se genera desde esta acción social contestataria no se destroza contra el Estado en la acción directa, entonces con el paso del tiempo tiende a incrustarse en el cuerpo del poder buscando así una influencia más decisiva en la consecución de los intereses de sus representados o en beneficio de los intereses de esa dirigencia.

Sucede entonces que aun cuando la represión no haya desmantelado al movimiento social ni tampoco haya dividido a su vanguardia, las manifestaciones colectivas disidentes tienden a desgarrarse entre una acción social (resistencia a la exclusión, a la dominación, al despojo y a la explotación en una sociedad autoritaria con un Estado muy poderoso) y una acción política (que la dirigencia busque ampararse del Estado o ejercer su influencia en los aparatos de poder preestablecidos). Así, la *acción social* parece estar más emparentada con las nuevas formas de la política acentuadas por la crisis, mientras que la acción política responde más a los mecanismos del sistema sociopolítico heredado por la etapa populista. Asistimos entonces, tarde o temprano, a un desgarramiento dentro de la

propia dirigencia, pero también entre la base y la dirigencia, entre la acción social, la acción política, entre los movimientos sociales y los partidos. Esto nos explica desde otro ángulo por qué las instancias de la sociedad, los puntales de la democracia, son constantemente abatidos.

Quizás en estos desgarramientos reiterados se encuentre la explicación del funcionamiento cíclico de sociedades como la mexicana, en la que a un larguísimo período de orden asegurado por el autoritarismo de un actor central sucede un derrumbamiento casi total del Estado y del sistema político. Llegada esa ruptura, la acción directa, masiva, plebeya y en muchos casos descompuesta no cesa hasta que, por el principio de la guerra y la sucesiva eliminación de las facciones, una fuerza hegemoniza la escena e instaura un nuevo orden necesariamente autoritario. Se instala un nuevo monopolio del poder y se aplasta, se desmantela o se integra a todos aquellos brotes de oposición, pero jamás se les acepta como un interlocutor con un espacio ganado y una continuidad asegurada.

No estamos hablando, sin embargo, del siglo XIX mexicano. La clase media en robustecimiento choca con todo este esquema exigiendo para sí, y no para las alturas, las parcelas de poder a que tiene o cree tener derecho. La ausencia de aparatos intermedios pero anclados en lo social se vuelve un punto neurálgico de la sociedad y la política: formas sindicales más independientes, profesionalizadas y estables en su desenvolvimiento; partidos de oposición menos ideologizados y jerarquizados, que exijan menos disciplina militante en células y secciones y se encuentren menos vueltos hacia el poder. Éstas son aspiraciones de esa parte integrada y moderna de la sociedad, y de todos los movimientos sociales emergentes y tienen una gran demanda.

Precisemos ahora las formas en que esto se da en el régimen de De la Madrid. Lo primero que aparece claro es que el sindicalismo independiente, a la manera del sexenio antepasado, no sólo no ha sido el camino abierto para hacer política sino que toda supervivencia fue borrada. Al respecto, no deja lugar a dudas el tratamiento hostil y escarmentador que recibieron los dos sindicatos independientes más poderosos al inicio del régimen. En efecto, al STUNAM y al SUTIN se les aplicó un castigo especial que los debilitó severamente para luego integrarlos a una institucionalidad moderada o hacerlos desaparecer. Pero también el terreno partidista-parlamentario, que López Portillo toleró y alentó, fue cuestionado desde el principio en todos aquellos casos en que el partido se ligó a una manifestación real del malestar de la sociedad, a una lucha social. El tratamiento que se le dio a la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) en su alianza con el PSUM y a los municipios en donde la izquierda parecía consolidarse, puso en duda el futuro de la Reforma política.

Es más, hoy podemos establecer que ante la virulencia represiva del primer año del gobierno de De la Madrid y ante el temor de perder el empleo, temor cierto incluso para los sectores más combativos, la acción

social mexicana ha abandonado el terreno de las luchas o movimientos sociales activos y se ha canalizado con más fuerza que antes hacia el plano del sistema político y las contiendas electorales o, en el extremo opuesto, hacia los movimientos defensivos de base y no confrontacionistas como los descritos.

En lo que hace a la primera expresión, se podría agregar que por primera vez *de manera prolongada* el gobierno ha perdido la capacidad de imponerle límites, canales de expresión y mecanismos cooperativos a las manifestaciones de la oposición. En efecto, al inicio del sexenio, el régimen pareció dispuesto a alimentar un cierto robustecimiento del Partido Acción Nacional, no sólo para contrabalancear al relativo florecimiento que mostró la izquierda gracias a la reforma política, sino muy principalmente para temperar las exigencias del propio partido oficial, es decir, la fuerza de la política tradicional y de "la política", y modificar así las reglas del juego, debilitando las grandes centrales y generando más bien varios polos de poder que dispersaran y fragmentaran, entre otras cosas, la capacidad negociadora del sector laboral. Como si se tratara de destruir, de devastar los promontorios de aglutinación del poder dentro y fuera de la estructura oficial: diluir el hemisferio popular-nacional de la política para ir logrando así un Estado "más pequeño", menos masivo, pero de una altísima eficiencia y concentración ejecutiva (muy feadmaniano y propio de los regímenes burocrático autoritarios). Así, frente a este aparato, el esquema original del sexenio esbozaba la necesidad de fomentar una gran cantidad de pequeños cuerpos (junto a la CTM se alentó a la CROM), pequeñas salientes de poder moderado que compitieran entre sí.

Fracaso rotundo de la estrategia del monstruo, quizás por primera vez; se diría incluso que fue doble fracaso, primero, porque como bien sabemos, el PAN resultó ser un catalizador de la oposición inesperadamente poderoso y, segundo, porque para contrarrestar el inesperado ascenso panista hubo que reanimar y relegitimar el monopolio priísta; la actividad de la sociedad mexicana se ha concentrado desde entonces en el plano del sistema político, en la lucha electoral de un lado, y en los movimientos defensivos de base, de otro lado. Nos encontramos por primera vez ante dos fenómenos con una cierta continuidad en el escenario sociopolítico mexicano exterior al sistema.

Pero estos fracasos del régimen y estos cambios en las reglas del juego no son más que el reflejo fiel de lo que podría ser denominado el fin abrupto del populismo mexicano. En efecto, en sólo cuatro años, a diferencia del resto de América Latina en donde el ocaso populista ha tomado incluso dos decenios, el Estado ha pasado de la gran bonanza económica a la absoluta falta de recursos para realizar inversiones productivas, responder a las exigencias tradicionales del gasto público y afrontar las obligaciones de una deuda externa cercana a los 100 mil millones de dólares

(dolarización y fuga de capitales, corrupción y malas inversiones, cambios en las tasas de interés internacionales y caída de los precios del petróleo, son las causas principales en que resultaría ocioso detenernos). El Estado se "achica" por todas estas razones en una economía en donde el sector público continúa siendo el agente dinamizador. La venta masiva de empresas gubernamentales, el licenciamiento en las filas de la burocracia estatal, los drásticos recortes en las inversiones de beneficio social y en los subsidios a la canasta básica de la alimentación popular, la suspensión de contratos y concesiones al sector privado para la realización de obras públicas, son todos elementos que denotan una reformulación profunda del pacto populista y de la fidelidad de las bases populares hacia el régimen.

Este retiro del Estado distribucionista no hace sino dejar libre expresión a esa tendencia a la desigualdad y en el extremo a la *dualización* de las categorías socio ocupacionales y de la sociedad en general tan característica de América Latina y, en particular, de los países de elevado desarrollo económico y gran heterogeneidad social como el Brasil. En efecto, si bien México fue capaz hasta los años setenta de desarrollar una franja de sectores medios a expensas de las capas más ricas y también de las más pobres, el fin abrupto del pacto populista devela una progresión acelerada de este ejemplo dentro de lo que A. Touraine, G. Rama y V. Tokman, entre otros, han señalado como la tendencia predominante de las sociedades de América Latina: una debilidad de los actores de clase, de los sectores modernos y, en general, de las categorías sociales e históricas producto de una incapacidad de absorción progresiva y suficiente de lo tradicional por lo moderno. Dicho de otra manera: una creciente desigualdad de oportunidades producto de *un capitalismo limitado y excluyente* que a pesar del desarrollo acelerado y las elevadas tasas de inversión de los últimos tres decenios (o más bien por eso mismo) ha redundado en la mayor heterogeneidad de la sociedad y en su dualización: vemos así al lado de la economía establecida, un sector informal que prolifera conforme la crisis se agudiza y los grupos marginados tienen el panorama urbano; por su parte, el campesinado tradicional se desarticula sin transformarse necesariamente en un agregado de asalariados agrícolas y más bien coexistiendo con el minifundismo, o transitando entre ambos medios; por otro lado, mientras los obreros no calificados no han mejorado su nivel de vida, los calificados tienen salarios reales mejores y han conseguido un nivel de vida superior (las confederaciones sindicales son a menudo más débiles que las federaciones o los grandes sindicatos de empresa); entre la gran industria y la pequeña encontramos también esta brecha (o entre el empresariado moderno y la oligarquía financiera y comercial), y lo mismo acontece, en fin, entre la pequeña burguesía, o la clase media tradicional (burócratas, profesionistas), y la nueva clase media asociada al proceso de desarrollo técnico y científico.

Concentremos nuestra atención en los efectos que la nueva etapa de

crisis internacional, baja de los precios del petróleo y "achicamiento" del Estado han tenido sobre el sistema político (ese espacio de la representación y de la influencia que se abre entre lo social disperso y el actor estatal).

Debido a la fuerza de la herencia popular nacional y del Estado fuerte, y debido, quizás por lo mismo, a la inexistencia de una crisis social importante (la más grave fue el movimiento estudiantil de 1968), México parece haberse ahorrado una etapa del proceso político latinoamericano que en el Cono Sur tuvo costos dramáticos.

En efecto, no cabe duda de que los llamados regímenes burocrático autoritarios basaron su empresa en el espejismo según el cual el orden y la política eran asunto del Estado, mientras los ciudadanos debían concretarse a desempeñar los papeles que tenían asignados en la economía, la sociedad y la cultura, entendidos como comportamientos si no completamente individuales y privados, al menos bien localizados y circunscritos en pequeñas unidades sin proyección organizativa más general (gobernar a través de la televisión fue quizás la utopía guía de este modelo). Sin embargo, poco tenía que ver la sociedad latinoamericana con esta visión ultracivilista en la que no cabrían ni siquiera las sociedades con fuerzas históricas bien asentadas en lo social (como los europeos), aunque no fuera tan extraña al individualismo consumista y atomizado de la sociedad civil estadounidense. Ni la hegemonía de clase ni la hegemonía fáctica del capitalismo basada en el consumo han impreso su sello a las sociedades latinoamericanas (ni siquiera en Argentina o Uruguay que fueron territorios vacíos, hiperurbanizados y de pleno poblamiento europeo).

Debido a la dualización cada vez mayor de la economía y a la doble lógica sociopolítica, las categorías socio ocupacionales (clases obreras, burguesía, campesinado y sectores medios) se encuentran desarticuladas, incapaces de establecer identidades consistentes, incapaces de devenir actores que, como en el esquema capitalista clásico, puedan defender sus intereses, producir una ideología acorde con sus metas y organizar sus formas de representación política de manera que logren aumentar su influencia. Como dice Alain Touraine, en América Latina no se aplica el "principio de representatividad", según el cual la ideología representa una fuerza política que corresponde a su vez a una categoría social. La acción colectiva se vuelve entonces una combinación abigarrada de orientaciones clasistas, modernizadoras-democratizantes, nacional-populares, comunitario-defensivas, etc. En estas condiciones, las fuerzas propiamente sociales pierden consistencia, amplitud y continuidad (devienen fácilmente alianzas enormes y, en esa medida, endebles y discontinuas), su acción tiende a beneficiar a los aparatos de representación y a las dirigencias, y por lo mismo la acción social tiende a subordinarse a la acción política. Pero hay algo más: los actores políticos así producidos tienden a volverse autónomos, a no representar más a los actores sociales, se vuelven parte del sistema político. De ahí la poca importancia que tienen los movimientos

o partidos solamente de clase, únicamente nacionalistas o únicamente modernizantes. Los partidos políticos importantes tienden a combinar todas estas dimensiones, y como su referente social es tan disperso tienden más bien a identificarse con el Estado. De aquí sin duda el fracaso del modelo burocrático-autoritario, incapaz de enfriar o hacer desaparecer el sistema político ahí en donde éste ha sido un espacio privilegiado de la vida social. Así se explica también esa soledad del poder de las dictaduras militares, esa opacidad de la vida política que según Guillermo O'Donnell caracterizó a aquellos regímenes. Asistimos pues al renacimiento de los partidos, del parlamentarismo, de los sindicatos, de la política de masas, de la democratización (que no es otra cosa que la refundación del sistema político), etcétera.

La fuerza de la dimensión popular-nacional y la ausencia de rupturas sociales profundas, decíamos, han hecho que México transitara hacia una redefinición de su sistema político sin los traumatismos sudamericanos. Sin embargo, la severidad de la crisis económica y el achicamiento del Estado en los últimos cuatro años, ponen frente a nuestros ojos un fenómeno completamente nuevo: una extrema tensión entre el aparato del gobierno y el aparato del partido (del PRI, que en el caso de México ocupa un espacio enorme). En efecto, pareciera como si en sólo cuatro años la comunicación y la continuidad perfecta que existía entre el Estado y su partido se hubieran trastocado; es como si la alta burocracia gobernante se dedicara a gestionar las salidas para el *desarrollo* económico y la crisis (pagar la deuda, sanear el presupuesto público, acordar con el FMI, relanzar la economía, integrarla al mercado mundial y en especial al norteamericano, etc.), mientras el partido debiera encargarse del *consenso* (crear corrientes de opinión, ganar elecciones, organizar la defensa de la nación frente a los acuerdos injustos con los centros de la economía mundial, defender los precios de la canasta básica de la alimentación popular, etc.). Las dos funciones contradictorias de todo Estado capitalista moderno (desarrollo económico-consenso redistributivo) parecen ser portados por actores distintos: el gobierno y el partido. Esto se hizo evidente en México desde 1982, cuando el entonces candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid, entró en conflicto con Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (sector obrero del PRI), y también cuando la clase política comenzó a ser separada entre viejos políticos de tradición, llegados al poder por la vía de la contienda electoral y nuevos tecnócratas sin tradición partidista pero que desplazaron al primer grupo en los más altos puestos del aparato estatal. El reacomodo del sistema político es, pues, una de las maniobras delicadas del fin del populismo mexicano. Pero es evidente desde ya que *aparato de desarrollo* y *aparato de consenso* no tienen el mismo personal y que los miembros de uno y otro medio no son intercambiables debido a la diferenciación cada vez mayor de sus funciones. Naturalmente, la toma de las nuevas distan-

cias plantea nuevos problemas, no resulta clara o no es aceptada. Por ejemplo, el Partido en tanto aparato tradicional de obediencia no logra tomar distancia del Estado y sigue apoyando las decisiones, antipopulares en su mayoría, propias de este momento de crisis, lo cual provoca que pierda legitimidad aceleradamente frente a los amplios sectores, y esta situación se agudiza cuando para ganar las elecciones debe recurrir al fraude. No logra asumirse como sistema de consenso, a cierta distancia del Estado, y quiere seguir funcionando como correa de transmisión de la política gubernamental y como espacio de reclutamiento de la alta burocracia (y es que es normal, todo el personal político intenta ascender a los altos puestos del Estado. Así, mientras el presidente siga siendo reclutado entre la tecnocracia, el partido y todo el sistema político seguirán sin poder tomar distancia del aparato gubernamental básicamente preocupado por el desarrollo económico). Por su parte, el presidente, en estos primeros tanteos, también aparece demasiado cerca del equipo que administra la crisis y el desarrollo; no hay un jefe de gobierno, un jefe de gabinete distinto de la figura presidencial que absorba el desprestigio de las políticas antipopulares. Esta falta de distancia con respecto al aparato de desarrollo-crisis, por un lado, y con respecto al aparato de consenso, por el otro, desgasta excesivamente el principio presidencial de unidad estatal que entre otras cosas debería mediar las tensiones entre estos dos aparatos. El principio de unidad estatal que en este caso es presidencial no puede ni identificarse al grupo del centro ni al que administra la crisis: una redefinición de las distancias entre Estado y sistema político (Estado-partido), presidente y aparato de administración de la crisis, presidente y aparato electoral, parece estar sugerida en las tendencias recientes de la vida política mexicana. También en el resto de América Latina, en el actual momento de vuelta a la democracia, estos temas parecen ser centrales (particularmente en Argentina con su segunda república alfonsinista y en el Brasil de Sarney).

Pero independientemente de la bondad y de la eficiencia de tales reacomodos, una cosa es cierta: en el caso mexicano las organizaciones de masas y del sistema de representaciones tradicional se han vaciado. No es aquí el lugar para hacer una lista detallada de los frentes sociales, asistenciales y culturales de que se ha retirado el sector público a consecuencia de los recortes presupuestales ni de las industrias y organismos públicos que han sido liquidados o que lo serán por la inminente apertura del mercado doméstico acordada con el FMI. Se están vaciando los sectores populares y campesinos, pues las organizaciones oficiales que las agrupan no tienen más que ofrecer (aunque la pequeña parcela o los 200 metros cuadrados en la más pobre periferia urbana siguen siendo un instrumento de manipulación). Hay distanciamiento por parte de las organizaciones obreras debido al cierre de empresas deficitarias, al reciclamiento industrial y a los peligros de desindustrialización implicados en la entrada al

GATT y en la apertura del mercado a las importaciones (condiciones llevadas al extremo en julio de 1986 para la renegociación de la deuda externa). Iguales actitudes se generan en el seno de las capas medias y de servicios: por un lado, entre las que dependen del sector público, debido a los recortes de personal, el congelamiento de salarios y prestaciones en situación de inflación elevada (involucrando a sectores tan delicados como la burocracia, el magisterio y las universidades), y por otro, a las capas medias en general, debido a la extrema falta de opciones políticas, la corrupción gubernamental, las tasas de interés inferiores a la inflación, la inseguridad ciudadana, la inmoralidad de la policía, etc. El propio sistema corporativo que establece la liga entre el Estado y las clases altas (grandes y pequeños industriales, comerciantes, financieros, agricultores y ganaderos de distinta talla), toma partido en el sentido literal del término: rechaza a la burocracia pública y al PRI y se vuelca en cantidades alarmantes dentro de la corriente panista (aquí el PAN resulta entonces una corriente antigubernamental multiclasista. Distintos impulsos que encuentran en este partido una forma de antipriísmo y antigobiernismo y no tanto un partido orgánico en el sentido más clásico: disciplinado, jerarquizado y con una ideología compartida).

El Estado populista ya no puede responder al exceso de demandas populares; abandona el espacio de las representaciones y el sistema político, y su presencia material y económica disminuye, así como sus medios para responder a las necesidades sociales. De esta manera se generan naturalmente espacios vacíos que, en nuestra hipótesis, tienden a ser llenados por nuevas formas de organización ciudadana, popular: "nuevas sociabilidades". Las luchas, movimientos, corrientes y manifestaciones sociales ya no encuentran una salida hacia arriba, hacia la escotilla de las instituciones políticas, de los partidos, del parlamento y de las federaciones y centrales sindicales.

Al igual que en América Latina, los grandes movimientos y corrientes políticas que se orientaban, mantenían y vegetaban en el sistema político —como el aprismo, la Unidad Popular, el varguismo, el peronismo, etc.— comienzan a ser asunto del pasado, mientras que las grandes rupturas nacional-revolucionarias del orden —como lo fueron las revoluciones mexicana, cubana, boliviana, nicaragüense...—, tampoco parecen perfilarse como la vía del quehacer político latinoamericano (fuera de las sociedades más atrasadas, y con sistemas de dominación arcaicos).

El panorama de la acción social se modifica totalmente cuando se desvanece al ilusión de cambiar las condiciones de vida a través de la influencia política de los representantes. Los partidos políticos de izquierda, pero también los popular-nacionales y los social demócratas, sufren un descrédito ante la pérdida de su influencia y entran en serias tensiones con las luchas sociales. Así, ante la incapacidad obvia e histórica de constituirse como actores de clase, ante el desmantelamiento de la masa en

tanto sujeto popular y ante el enfriamiento y la desaparición del sistema político, las luchas sociales tienden a refugiarse en identidades más pequeñas y *de base*, restringidas, pragmáticas en sus planteamientos y en sus demandas y orientadas a la solución de problemas más cercanos a la vida cotidiana; más reformistas y gradualistas que tendientes al cambio violento de las estructuras; desideologizadas (marxismo, trotskismo, maoísmo, leninismo, guevarismo), para no provocar la confrontación, aunque cercanas a las agencias cristianas de base; más democráticas en su interior y reticentes a la producción de estructuras piramidales de representación y hombres poderosos; no dadas a la publicidad porque entre otras cosas no son "noticia"; capaces de hablar el mismo lenguaje que el adversario y aprovechar incluso sus movimientos favorables, inscribiéndose transitoriamente en su impulso; atentas a no confundir su acción con la de los partidos políticos, frentes o coordinadores cuando éstos buscan naturalmente concentrar fuerzas; atentas también a no enrolarse con otros conflictos más generales, más álgidos o que tienden a la confrontación inútil (sin que esto implique no brindarles apoyo); reticentes a las grandes explicaciones economicistas y academicistas así como a las lucubraciones empecinadas en la toma del poder aquí y ahora; escépticas ante el lenguaje tecnocrático en tiempos de crisis que habla más de las cosas, los incrementos y la técnica y casi nunca de los hombres y de sus problemas.

En el caso mexicano, estos planteamientos han permitido a algunas luchas colectivas dos cambios fundamentales con respecto a las constantes de la acción social: un planteamiento no confrontacionista ante el adversario estatal (lo que impide a este último el empleo de la represión, el desmantelamiento de la organización, la cooptación de lo que quede de su dirigencia y de sus demandas) y, resultado de ello, una mayor continuidad en tanto manifestaciones sociales y democráticas. Autorrepresentaciones políticas en forma de Comités de Defensa Popular, Consejos Comunales, Juntas de Vecinos, Comités de Abastecimiento, Coalición de Ejididos, Pueblos o Colonias, Comunidades Religiosas, Comités de Mujeres, "Bandas" Juveniles de Defensa ante la Crisis, Asociaciones de lucha por la Ecología, Sindicalismo de Base, Gremialismo, Cooperativismo, Luchas Municipales, Comités en Busca de Desaparecidos Políticos, Organizaciones Barriales, etc., son formas más restringidas de hacer política que han proliferado en Chile, Brasil, Perú, Argentina, México, Venezuela y, en general, en todo el subcontinente en el ocaso del Estado popular-nacional.

La velocidad con que los sectores populares en México dejan atrás la mecánica paternalista quedó de manifiesto durante el terremoto de septiembre de 1985: al conjugarse la magnitud de la catástrofe, que rebasó cualquier principio centralizado de acción, con la imagen de un Estado que se encerraba en palacio a vigilar mezquinamente lo que quedaba en el fondo de las arcas, los grupos de damnificados se lanzaron a actuar con lo que tenían al alcance de la mano, se autoorganizaron de manera mucho

más eficiente que el propio ejército, de manera que al partido del Estado le ha costado mucho retomar cierto control de la situación (amenazando a algunas colonias con no canalizar los recursos para la reconstrucción si siguen apoyando a las organizaciones independientes o con no hacer efectivo ahí el decreto expropiatorio de los predios, etcétera).

CONCLUSIONES

Concluamos estableciendo la siguiente hipótesis: los sujetos históricos o actores colectivos en América Latina parecen caracterizarse por haber pasado de una "situación predominantemente de masas" a una de colectividades restringidas tal como la hemos definido (o por ir y venir entre estos dos extremos), sin haber recreado de manera nítida una "situación de clases". El panorama podría incluso volverse un poco más complejo, diríase que en un país como México, actualmente se combinan a veces en forma de vectores coincidentes, otras contradictorias, las siguientes grandes corrientes de la acción sociopolítica: *a*) la *lógica popular-nacional* que se vacía pero no desaparece como ordenador básico; *b*) la *clasista de pretensión hegemónica* que, sin embargo, no logra aglutinar a su alrededor la dinámica social debido a la dualización, la heterogeneidad y la desarticulación; *c*) la *modernizante-consumista* tan propia de los sectores mejor integrados al desarrollo, y *d*) la *lógica comunitario-defensiva*, única opción ante la pobreza creciente en el ocaso del populismo.

Decir que las dos últimas son lógicas más "societales" mientras las dos primeras involucran al Estado como parte indispensable de su funcionamiento es más adecuado que hablar de corrientes democratizadoras (*c* y *d*) y corrientes estatizantes o autoritarias (*a* y *b*), pues de otra manera corremos el riesgo de discutir si hay o no democracia en la distribución de tierras y tendajones del jacobinismo, o si el ejido impulsado por Cárdenas sirvió más para la construcción del Estado que para mejorar la alimentación del campesinado o, en fin, si es más democrático un voto, un bolillo o un tornillo. Digamos más bien que a la primera lógica descrita (popular-nacional) correspondería un impulso *democrático popular* (jacobino), a la segunda (clasista-hegemonizante) el espinoso problema del *centralismo democrático*, a la modernizante-consumista la *democracia ciudadana* (del individualismo posesivo y el pluralismo) y a la lógica comunitario-defensiva la *democracia como identidad restringida* (pero no cabe duda que en ocasiones un tipo de impulso democrático neutraliza y aun contradice a los otros).

Así, sería un error pensar que porque en México todos estos tipos de efervescencia social se encuentran activados, el fin del orden político e incluso del sistema social se encuentran cercanos. En una sociedad en donde el eje masa-líder impera aún, es difícil que la activación de la base

trastoque el orden global. Quizás entonces si hay algo alarmante en la situación actual son las fisuras entre al élite económica y política que hoy se materializan entre el norte y el centro, y quizás aún más grave sería que toda esta efervescencia pudiera coincidir con las tensiones que aquejan a la élite política, a “la familia revolucionaria”, entre el Estado y el partido, entre la tecnocracia y la política en sentido fuerte (incluido el sindicalismo naturalmente), los que tienen a su cargo la cohesión, el acuerdo constante, las mediaciones, la manipulación en ocasiones corrupta, la represión...

Sería difícil contestar a la pregunta de en qué punto está más débil el sistema político mexicano: si al gigante, por el debilitamiento de sus bases sociales, lo aqueja una especie de reumatismo; si son más bien dolencias lumbares, provocadas por las veleidades democratoides de los sectores medios y por la autonomización de una clase obrera embarneçada; si lo verdaderamente serio es la hemiplejía entre herencia popular-nacional y modernismo democrático y de clase, entre el Norte y el Centro, o en otra sintomatología, entre la lógica societal y la estatal; quizás lo preocupante sea, en fin, la esquizofrenia entre tecnócratas y políticos agravada por la inminencia del cambio sexenal, o más aún, un arranque de paranoia nacionalista ante las amenazas de un vecino del norte que ya no ve diferencias entre la dictadura haitiana y la del Zócalo de la República.

Lo dicho hasta aquí permite también una conclusión más general que podríamos enunciar así: el fin de los populismos trae consigo el vaciamiento del sistema político (el centro neurálgico de gravitación de la sociedad latinoamericana); este vaciamiento ensancha la distancia entre Estado y sociedad \updownarrow : el Estado se achica y se retrae en su neoliberalismo al mismo tiempo que la sociedad recrea identidades más restringidas, defensivas ante la crisis (no sólo en lo que hace a la masa del pueblo, pues el fenómeno se siente también en el sindicalismo y en los grupos medios). A esto se agrega la tensión propia del desarrollo capitalista tardío hacia una dualización de todas las categorías socioprofesionales, hacia la profundización de la heterogeneidad concomitante y de la desarticulación sociales y, en el extremo, de la doble lógica sociopolítica descrita: Estatal-popular $\leftarrow| \rightarrow$ societal-modernizante.

Si el caso clásico implicó, por un lado, integración de Estado y sociedad unificadas por el proyecto dirigente y hegemónico de una clase revolucionaria que fue la burguesía \updownarrow , y, por otro, integración y homogeneización del todo social gracias a la fuerza expansiva de la industrialización temprana, $\rightarrow| \leftarrow = \rightarrow \leftarrow$, el modelo sociopolítico latinoamericano debería estar representado, en contraste con la anterior figura autocentrada, por

una figura en desagregación creciente: $\leftarrow \begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \rightarrow$

¿Quién es capaz de unificar un panorama a tal grado disperso? Ya Alain Touraine ha hecho notar el papel central que en América Latina ha desempeñado la *intelligentzia* que, un poco a la manera rusa, ha sabido proveer los mitos unificadores como lo fueron el propio populismo, el desarrollismo, el nacionalismo-revolucionario, etc., sin los cuales resulta prácticamente imposible mantener amalgamadas tendencias tan disímbo-las como el impulso clasista, el popular-nacional, el localismo comunitario (del indigenismo, por ejemplo), o el modernismo consumista y pluralista de los grupos urbanos mejor integrados al capitalismo. Hoy, la referencia a la democracia parece el único hilo, endeble, pero con una mínima posibilidad de atar todas estas manifestaciones dispersas que los regímenes militares fueron incapaces de administrar con su alarde represivo. Quizás por ello democracia e intelectualidad latinoamericana renacen con tal fuerza; pero quizá también por ello, esta dispersión, este estallamiento de manifestaciones haga pasar al primer plano, como única salida, una función subrayada de lo ideológico, mezclado con el nacionalismo en unos casos, místico y religioso en otros, hiperpolitizado y confrontacionista o, en fin, no exento de un retorno fundamentalista en otras situaciones.